

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO



JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN TERCERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo del año dos mil veintiuno (2021)

JUEZ	Magda Cristina Castañeda Parra
MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN No.:	110013343064-2021-0023-00
DEMANDANTE:	Yourly Maulin Duarte Mesa y otros
DEMANDADO:	Nación – Ministerio de Defensa- Ejército Nacional y Policía Nacional
ASUNTO	RECHAZA DEMANDA

REPARACIÓN DIRECTA
RECHAZA DEMANDA

I.- ANTECEDENTES

Correspondió a este Despacho la demanda de reparación directa instaurada por los señores **Lucy Stella Mesa, Luis Enrique Duarte Bello, Leonardo Enrique Duarte Mesa, Yourly Maulin Duarte Mesa, Brigeth Solanyi Duarte Mesa**, en contra **de la Nación- Ministerio de Defensa Ejército Nacional – Policía Nacional**, con la finalidad de que se les declare administrativamente responsables por la muerte del señor Luis Eusebio Mesa Moreno, ocurrida el 21 de marzo de 1999, por integrantes de las Farc; y como consecuencia de ello, por el desplazamiento de los demandantes de su lugar de residencia en el Municipio de Málaga, hacia la ciudad de Bucaramanga el 20 de marzo de 2001, con ocasión de las amenazas de muerte recibidas por el mencionado grupo armado.

Para resolver se hacen las siguientes:

II.-CONSIDERACIONES

En este caso se demandó por la muerte del señor Luis Eusebio Mesa Moreno, ocurrida el 21 de marzo de 1999, que se dice fue ocasionada por integrantes de las Farc; y consecuentemente, por el desplazamiento de los demandantes de su lugar de residencia en el Municipio de Málaga, hacia la ciudad de Bucaramanga el 20 de marzo de 2001, con ocasión de las amenazas de muerte recibidas por el mencionado grupo armado.

En reciente pronunciamiento, el Consejo de Estado Sección Tercera¹, unificó los criterios para computar el término de caducidad por daños derivados de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Dispuso que en dichos eventos, no bastaba la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, sino que, deberían tenerse en cuenta, aspectos tales como; i) el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y, el ii) término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

Al respecto, el Consejo de Estado, señaló:

“UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de empezará a correr el plazo de la Ley.”

Al analizar el escrito de demanda y las pruebas aportadas al proceso, se puede determinar que: i) la responsabilidad que solicitan se declare en el presente asunto, la derivan los demandantes del hecho de la muerte del señor Luis Eusebio Mesa Moreno, por parte de miembros de las Farc, ii) y además, por el desplazamiento de que fueron víctimas los demandantes de su lugar de residencia en el Municipio de Málaga, hacia la ciudad de Bucaramanga el 20 de marzo de 2001, en razón a las amenazas de muerte recibidas por el grupo armado que dio muerte al señor Luis Eusebio Mesa Moreno.

En el escrito de demanda en el hecho cuarto, se indicó lo siguiente: “(...) Es así, que la señora LUCY MESA ORDUZ, hija del señor MESA MORENO, y su núcleo familiar compuesto por su esposos LUIS ENRIQUE DUARTE BELLO y sus hijas, para entonces menores de edad YOURLY MAULIN DUARTE MESA y BRIGETH SOLANYI DUARTE MESA, el menor LEONARDO ENRIQUE DUARTE MESA a esa fecha no había nacido aun, también aquí demandantes, tuvieron que

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, SU del 20 de enero del 2020, expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01, Consejera Ponente Dra. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

*desplazarse de su lugar de residencia y habitación, el Municipio de Malagá, **a partir del 20 de marzo de 2001** hacia la Ciudad de Bucaramanga, por las amenazas de muerte de que fueron objeto, por parte del grupo armado que dio muerte a su padre”.*

Igualmente, se indicó en el hecho uno que: “La familia MESA ORDUZ, para el año 1999 vivía en el Municipio e Málaga, Santander, siendo el padre el señor LUIS EUSEBIO MESA MORENO, quien se desempeñaba como comerciante de muchos años, y recientemente como CONCEJAL de esa municipalidad desde el día 31 de Diciembre de 1998, periodo que lamentablemente no alcanzó a concluir, **pues fue asesinado por el FRENTE 45 de las FARC el 21 de marzo de 1999”.**

Ahora bien, respecto del primer hecho que se reputa como dañoso, es decir la muerte del señor Luis Eusebio mesa Moreno, la parte actora indicó que la misma ocurrió el 21 de marzo de 1999, lo que fue corroborado con el registro civil de defunción aportado en el expediente, en el que se indicó como causa del deceso “violenta por arma de fuego”. Ahora, respecto del segundo hecho dañoso la parte actora consignó como fecha del mismo el 20 de marzo de 2021.

Respecto de las responsabilidad de las entidades demandadas, la parte demandante señaló: “**la omisión estatal es evidente, tanto por la muerte del señor LUIS EUSEBIO MESA MORENO quien fungía como concejal del municipio de Málaga, al momento de su muerte, como por la posterior desprotección de las autoridades, debida a su familia, es así que este doble atentado en contra de los derechos fundamentales es atribuible a las demandadas, pues para la época era por todos conocido la compleja situación de orden público vivida por la región y sin embargo las autoridades militares y de policía nada hacían por recuperar la tranquilidad de los habitantes, basta observar los relatos de quienes fueron llamados a declarar en el proceso que aún se investiga por ésta muerte, como de los mismos delincuentes, quienes todos coinciden en que esta era una zona abiertamente tomada por estos grupos de delincuencia organizados, denominados como que guerrilla (...).**”

De la lectura de la demanda es claro que la parte demandante atribuye la responsabilidad de las demandadas, a la omisión en sus obligaciones de protección, situación que aseguran, contribuyó a la ocurrencia de los dos hechos que se reputan como dañosos, esto es, la muerte del señor LUIS EUSEBIO MESA MORENO y el desplazamiento de los demandantes de su lugar de residencia.

Así las cosas, para el primer hecho dañoso habrá que contarse la caducidad desde el día siguiente a la ocurrencia de la muerte del señor **LUIS EUSEBIO MESA MORENO (21 de marzo de 1999)**, por lo tanto el término máximo para presentación de la demanda feneció el 22 de marzo de 2001, sin que

proceda incluir en el conteo, interrupción alguna por la radicación de la conciliación extrajudicial, pues está ocurrió hasta el 18 de diciembre de 2019, esto es, transcurridos 18 años desde el vencimiento del plazo para impetrar el medio de control, el cual se promovió el 9 de febrero de 2021 (fl. 4). Por lo que para este hecho, el medio de control de reparación directa se encuentra a todas luces, caducado.

Ahora bien, respecto del segundo de los hechos señalados, que se hace consistir en el fenómeno de desplazamiento, para este caso en concreto deberá analizarse, la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional, que estableció en su parte resolutive:

"VIGÉSIMO CUARTO.- DETERMINAR que para efectos de la caducidad de futuros proceso judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta transcurros de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta".

En tal virtud y en aplicación de la sentencia SU-254, el Consejo de Estado, entre otras providencias, ha considerado que:

"Finalmente, conviene precisar que la imprescriptibilidad de la acción penal frente a delitos como el de desaparición forzada no es extensiva en sus efectos a acciones como la ejercida en el sub lite, porque la misma tiene por objeto evitar que este tipo de conductas penales queden impunes ante la imposibilidad de establecer en determinado lapso la responsabilidad de los implicados, consecuencia que no es aplicable a la responsabilidad extracontractual, porque la procedencia de la condena patrimonial al Estado no está condicionada a la imposición de una sanción penal, de ahí que proceda incluso en eventos en los que esta no se profiere, bien sea porque no es posible identificar a los responsables o porque estos son absueltos. (...)²".

Sumado a lo anterior, el Consejo de Estado ha entendido que el desplazamiento no es una condición limitante para el ejercicio de derechos, en donde no se pueda aplicar el término de caducidad, pues su situación especial, no impide que en oportunidad puedan acudir ante la jurisdicción, otorgando poder para tales fines³

En ese orden de ideas, en casos de desplazamiento forzado, procede aplicar los términos de caducidad, a partir de la ejecutoria de la sentencia SU 254

²² Consejo de Estado, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico, 26 de mayo de 2016, rad. 47001-23-33-000-2015- 00231-01

³ Consejo de Estado, providencia del 19 de julio de 2017, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico, rad. 25000233600020160129401, 58480.

del 24 de abril de 2013. Dicha sentencia fue notificada el 19 de mayo de 2013 y, por ende, quedó en firme el 22 de ese mismo mes y año, es decir, para los casos que aún no cursaban ante esta jurisdicción, tenían un término para incoar la respectiva acción hasta el 23 de mayo de 2015.

Con todo, mediante la sentencia SU-254 de 2013, la Corte salvó los términos de caducidad en eventos de desplazamiento ocurridos con anterioridad a la ejecutoria de esa decisión, por lo que en los eventos de desplazamiento registrados con posterioridad a la ejecutoria de tal, el término de caducidad debía contabilizarse desde el hecho mismo, como lo establece el artículo 164, numeral 2, literal i) del CPACA.

Descendiendo al caso en concreto, se tiene que los demandantes pretenden el pago de perjuicios por el desconocimiento de la parte demandada de la obligación contenida en el artículo 2º de la Constitución Política de 1991, respecto de la posición de garante frente a los derechos jurídicamente tutelados. Luego, al existir incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad, y permitir que grupos al margen de la ley, causaran graves violaciones sobre los derechos de los demandantes.

En ese orden de ideas, como quiera que los hechos de desplazamiento ocurrieron antes de la sentencia citada, la parte actora tenía hasta el 23 de mayo de 2015, para formular la demanda y solicitar la conciliación extrajudicial en derecho.

No obstante que la celebración de audiencia de conciliación prejudicial, suspende el término de caducidad desde su presentación hasta que se logre el acuerdo conciliatorio, o se expidan las constancias respectivas, o hasta que transcurran tres (3) meses, lo que ocurra primera,⁴ lo cierto es, que en el presente asunto, dicha solicitud no logró suspender el término, por cuanto se radicó el **18 de diciembre de 2019**, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad CD obrante a folio 3.

Si la demanda se radicó el **9 de febrero de 2021**, (fl. 4), se tiene que la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de reparación directa, se presentó por fuera del término legal para hacerlo.

Finalmente, en el presente caso, no se evidencia la configuración de supuestos objetivos, como secuestros, enfermedades o cualquier situación que hubiere impedido a los demandantes acudir a esta jurisdicción dentro del término legal, y que permitiera de manera excepcional, inaplicar el término de caducidad, en los términos que se indicaron en forma precedente. Conforme con lo expuesto, se impone el rechazo de la demanda según lo preceptuado en el artículo 169 núm. 1º del C.P.A.C.A.

⁴ Artículo 21 de la Ley 640 de 2001.

Por lo anterior, se declarará de oficio la caducidad del medio de control. Por lo tanto, se rechazará la demanda de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011.

En consecuencia, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: Rechazar por caducidad la demanda que en ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron a través de apoderado, los señores **Lucy Stella Mesa, Luis Enrique Duarte Bello, Leonardo Enrique Duarte Mesa, Yourly Maulin Duarte Mesa, Brigeth Solanyi Duarte Mesa**, en contra de **la Nación- Ministerio de Defensa Ejército Nacional – Policía Nacional**.

SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión por correo electrónico de la apoderada judicial de la parte demandante, en atención a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 806 de 2020.

TERCERO: Por Secretaría déjense las constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MAGDA CRISTINA CASTAÑEDA PARRA
Juez